INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY 80 DE 2014 SENADO.

Por medio de la cual se reglamenta el Acto legislativo 02 de 2009.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2015

Senador

MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO

Presidente

Comisión Primera Constitucional Permanente

Senado de la República

Ciudad.

Señor Presidente:

De acuerdo a la designación de la Mesa Directiva de la honorable Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República como ponente del Proyecto de ley número 80 de 2014 Senado, *por medio de la cual se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009*, me permito rendir informe de ponencia para segundo debate al proyecto con las siguientes consideraciones:

En primer lugar, la normatividad vigente ya faculta al Ejecutivo para reglamentar el uso de sustancias estupefacientes para fines médicos y científicos, por lo cual se hacen innecesarias las autorizaciones reglamentarias adicionales incluidas en esta iniciativa. En efecto, la Ley 30 de 1986, por la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes, estableció la posibilidad de que el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, reglamentara la disposición de estas sustancias para estos usos en particular. El artículo 3° de esta ley establece:

Artículo 3°. *La producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales estos se produzcan, se limitará a los fines médicos y científicos, conforme la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud.* (Negrilla fuera de texto).

Más aún, la misma norma en su artículo 4° plantea que:

Artículo 4°. *El Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las normas que para el efecto expida el Ministerio de Salud, señalará las drogas y medicamentos de que trata la presente ley que pueden importarse, producirse y formularse en el país, y los laboratorios farmacéuticos que las elaboren o produzcan de las plantas, de conformidad con las disposiciones del presente estatuto.*

Adicionalmente, la Ley 9ª de 1979 en sus artículos 460 y siguientes, estableció las condiciones para la expedición, por parte del Ministerio de Salud, de la reglamentación del uso de estupefacientes para fines medicinales.

De esta forma, los artículos mencionados dan cuenta de que la ley, desde los años 1979 y 1986, ya ha otorgado al poder Ejecutivo la posibilidad de reglamentar el uso medicinal de los estupefacientes en toda su cadena de producción, distribución y posesión, incluyendo por supuesto al cannabis, por lo que no se hace necesario otorgar de nuevo esta potestad, tal como

lo hacen varios de los artículos del texto aprobado en primer debate y del texto propuesto en la ponencia positiva.

Como lo ha reiterado la Corte Constitucional, la potestad reglamentaria del poder ejecutivo no tiene plazo, de forma que esta puede ejercerse en cualquier tiempo. Tal como lo establece la sentencia C-1005 de 2008, la potestad reglamentaria no solo radica en cabeza del Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, sino que el Presidente conserva dicha potestad durante todo el tiempo de vigencia de la ley con el fin de asegurar su cumplida ejecución. En este sentido, las facultades otorgadas por las leyes anteriormente mencionadas permanecen aún vigentes y seguirán estándolo, mientras estas leyes no sean derogadas. Por tanto, no es necesario renovar estas facultades mediante la expedición de una nueva ley.

En segundo lugar, el establecimiento por vía de ley de la regulación del uso medicinal de los estupefacientes en general, y del cannabis en particular, hace que esta reglamentación sea inflexible y susceptible de una rápida desactualización. Como se planteó en el primer debate de esta iniciativa, la investigación del uso medicinal y científico del cannabis se encuentra en pleno desarrollo, lo cual implica que con el paso del tiempo se irán descubriendo nuevas evidencias médicas (tanto positivas como negativas) de esta sustancia y de otros estupefacientes también. En este sentido, establecer una regulación por medio de la promulgación de una ley, la cual requiere de un trámite más largo que la expedición de un decreto del poder ejecutivo, dificulta la continua y pronta actualización de esta normatividad, en detrimento de la adopción de nuevas definiciones, usos, prohibiciones o demás contingencias con respecto a estas sustancias.

Si el gobierno procediera, como está en mora de hacerlo, a reglamentar el uso medicinal del cannabis, podría ir ajustando sus determinaciones, vía decretos, a medida que la practica así se lo vaya exigiendo. De esta manera, se podría estructurar una política pública más eficaz en la búsqueda de los objetivos de control del Estado en esta materia y al mismo tiempo más beneficiosa para los eventuales pacientes que requieran del uso terapéutico de esta sustancia. Por el contrario, si esta política se realiza por la vía legislativa, cualquier ajuste o modificación de ella tendría que realizarse por esta misma, con todos los costos de tiempo, inconvenientes para los pacientes e incertidumbre legal que ello produciría.

Por último, las modificaciones al Código Penal propuestas por el proyecto de ley en discusión son innecesarias. Tal como lo establecen en este momento los artículos 375, 376 y 377 del Código Penal (Ley 599 de 2000), las sanciones establecidas en estos artículos aplican cuando las conductas descritas en ellos (conservación o financiación de plantaciones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles, respectivamente) se realicen ¿sin el permiso de autoridad competente¿ o, en el caso del artículo 377, cuando la destinación de estos bienes se haga de manera ¿ilícita¿. En este orden de ideas, si el Ministerio de Salud reglamenta el uso medicinal y científico del cannabis (como está facultado para hacerlo) y otorga el permiso para el correspondiente uso de esta sustancia, los sujetos autorizados no estarían inmersos en ninguna de las conductas penales anteriores, pues estarían obrando de manera lícita y con el permiso correspondiente. Por tanto, la adición de los incisos propuestos por este proyecto no resulta necesaria y en cambio sí hacen más farragosa la normatividad penal.

De esta forma, a continuación me permito poner en consideración de la sesión plenaria la siguiente

Proposición

Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, me permito proponer a la Plenaria del Senado de la República el **Archivo** del Proyecto de ley número 80 de 2014 Senado, *por medio de la cual se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009*.

De los honorables Senadores,